

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 21 de actual, de su orden superior se publica en este PERÍODICO OFICIAL para general conocimiento.

Puerto-Rico, 24 de Marzo de 1894.—El Secretario del Gobierno General, *José García de la Concha*. [288]

Por el Ministerio de Ultramar se comunica á este Gobierno General con fecha 12 del mes próximo pasado y bajo el número 102 la Real orden que sigue:

“Excmo. Sr.:—Por consecuencia del pleito entablado por Don José Francisco Díaz ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado contra la Real orden de 15 de Abril de 1892, por la que fué nombrado Don Juan Miranda Inspector de instrucción primaria del distrito Sur de esa isla, con fecha 12 de Enero último, el Presidente de dicho Superior Tribunal, remite á este Ministerio el testimonio de la Sentencia recaída, revocando la expresada Real orden; en su virtud S. M. el Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que se remita á V. E. copia autorizada el testimonio de la sentencia dictada para su publicación y cumplimiento.—De Real orden lo digo á V. E. con inclusión de la copia de referencia para su conocimiento, fines expresados y demás que correspondan”.

Y puesto el cúmplase por S. E. con fecha 12 del actual, de su orden superior se publica en este PERÍODICO OFICIAL para general conocimiento, así como la Sentencia que se cita.

Puerto-Rico, Marzo 24 de 1894.—El Secretario del Gobierno General, *José García de la Concha*. [287]

MINISTERIO DE ULTRAMAR.

Sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso-administrativo en el expediente promovido por Don José Francisco Díaz, sobre revocación de la Real orden de 16 de Abril de 1892 por la que fué nombrado Inspector de 1ª enseñanza de Puerto-Rico Don Juan Miranda Costa.

Don Antonio de Vejarano, Secretario Mayor del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. Certifico: Que en la audiencia pública celebrada por este Tribunal el día veinte y tres de Diciembre de mil ochocientos noventa y tres, se leyó y publicó por el Excmo. Sr. Don Félix García Gómez, Vice-presidente del mismo la Sentencia.—En la Villa y Corte de Madrid á veinte y tres de Diciembre de mil ochocientos noventa y tres, en el pleito que ante Nos pende en única instancia entre Don José Francisco Díaz á quien representa el Licenciado Don Rafael María de Labra, demandante y la Administración general del Estado, y en su nombre el Fiscal, demandado, sobre revocación de la Real orden de diez y seis de Abril de mil ochocientos noventa y dos, por la que fué nombrado Don Juan Miranda Inspector de primera enseñanza de Puerto-Rico.—Resultando: que el Gobernador General de Puerto-Rico después de haber dado cuenta al Ministerio de Ultramar en catorce de Marzo de mil ochocientos noventa y uno, de haber quedado vacante el cargo de Inspector de primera enseñanza del Distrito del Sur de la Isla por pase á otro destino de Don Alejandro Infesta que lo desempeñaba, en veinte y cuatro del mismo mes y año remitió la relación de los interesados que solicitaban dicha plaza, manifestando al propio tiempo que concretándose á cumplir estrictamente lo que determina la Real orden de primero de Junio de mil ochocientos ochenta y uno (debe ser cinco de Febrero) se limitaría á remitir la terna correspondiente que había de componerse de Don Alejandro Montenegro, Don Federico Arnaldo Pujalte y Don José Francisco Díaz y Díaz, que eran los aspirantes que reunían las condiciones prescritas en el artículo ochenta y dos del Decreto orgánico vigente, porque como el artículo cuarto del Capítulo segundo del Reglamento de Inspectores de la Isla indicada que el citado cargo era de pura confianza del Gobierno creía conveniente remitir todos los expedientes originales, por si el Ministerio consideraba que podía ser nombrado alguno de los solicitantes aun cuando no hubiera servido Escuela Superior por espacio de ocho años como determina el artículo ochenta y dos

de Puerto-Rico de cuatro de Septiembre de mil ochocientos ochenta. Resultando: que de conformidad con esta propuesta fué nombrado por Real orden de diez y seis de Abril de mil ochocientos noventa y dos Don Juan Miranda, Inspector de primera enseñanza del Distrito del Sur de Puerto-Rico. Resultando: que contra la anterior Real orden, dedujo recurso contencioso administrativo á nombre de Don José Francisco Díaz el Licenciado Don Rafael María de Labra, formalizando la demanda después de recibido el expediente gubernativo, con la súplica de que se revoque dicha disposición declarando al interesado con derecho al empleo de Inspector de Escuela del Distrito Sur de Puerto-Rico, con la antigüedad del día en que fué dictada la Real orden recurrida.—Resultando: que en plazado el Fiscal para que contestase á la demanda le verificó pidiendo que se estimase la excepción perentoria de incompetencia de jurisdicción que alegaba, y si á ello no hubiese lugar, que se absolviese de la demanda á la Administración general del Estado, confirmando la Real orden impugnada.—Resultando que por auto de catorce de Febrero último, el Tribunal acordó no haber lugar al trámite de prueba solicitando por el Licenciado Labra en otro del escrito de formalización de la demanda disponiendo que se formase el apuntamiento en los autos.—Resultando: que el Licenciado Labra, sustituyó para el acto de la vista, en el de igual grado Don José Espinosa, comprendido también en el poder; y la Sala tuvo por parte á este último para el expresado efecto.—Visto siendo ponente el Consejero Ministro Don Angel María Dacarrete.—Considerando: Que la cuestión del presente litigio se reduce á determinar si el nombramiento de Don Juan Miranda Costa para el cargo de Inspector de primera enseñanza del distrito del Sur de la Isla de Puerto-Rico, se halla ó no ajustado á las disposiciones aplicables y que debieron tenerse en cuenta para su provisión.—Considerando: que vacante el indicado cargo en mil ochocientos noventa y uno las disposiciones á la sazón vigentes, y con arreglo á las cuales el concurso tuvo que ser convocado, eran el Decreto orgánico de la Instrucción primaria en Puerto-Rico de primero de Septiembre de mil ochocientos ochenta, y la Real orden de cinco de Febrero de mil ochocientos ochenta y uno, en los artículos ochenta y dos y disposición quinta respectivamente señalan las condiciones que han de reunir los aspirantes al cargo de Inspector de primera enseñanza, reservando al Gobierno su provisión.—Considerando: que la Real orden de nueve de Abril de mil ochocientos noventa y dos que modifica dicho artículo ochenta y dos y las condiciones en el mismo fijadas no podía ser aplicada al presente caso, puesto que se dictó no solo cuando el concurso para la provisión de la plaza de que se trata se hallaba ya convocado, sino cuando ya había espirado el plazo de la convocatoria y los interesados habían adquirido el derecho de que la plaza se proveyesen con arreglo á las disposiciones vigentes cuando ocurrió la vacante.—Considerando: por lo expuesto que la aplicación de la expresada Real orden implica el dar á esta disposición carácter retroactivo, con perjuicio del derecho de los aspirantes que reúnan las condiciones fijadas en el referido Decreto de mil ochocientos ochenta, lo cual es bastante para determinar la procedencia de la vía Contenciosa, puesto que es indudable que por ello se ha vulnerado el decreto que el demandante como uno de los aspirantes al concurso tenía anteriormente establecido á su favor por preceptos de carácter administrativo.—Considerando: que esto no obstante á la jurisdicción contencioso administrativa, no compete el determinar el aspirante en quien primeramente deba recaer el cargo si no únicamente el fijar las condiciones con arreglo á las cuales ha debido proveerse y la nulidad del nombramiento hecho por la Real orden impugnada, en cuanto resulta contrario á los preceptos á que debió ajustarse.—Visto el artículo primero de la Ley de trece de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho según el cual “El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse por la Administración ó por los particulares” las disposiciones que reúnan las

“Tercero: que vulneren fuertemente en favor del demandante otro precepto de la Ley de trece de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho” y el artículo ochenta y dos de la Instrucción Primaria del Distrito del Sur de Puerto-Rico, de 1º de Febrero de 1892 dice: “Los Inspectores serán nombrados por el Gobierno General”. Para optar á este cargo es necesario haber terminado los estudios de la Escuela Normal, y haber ejercido la enseñanza por espacio de cinco años en una escuela privada enseñando en ella los requisitos indicados en el artículo ochenta y dos del Reglamento.—A falta de los requisitos indicados, los aspirantes entre los Maestros superiores de la Isla deben consagrados ocho años á la enseñanza superior.—Vista la Real orden de cinco de Febrero de mil ochocientos ochenta y uno, que así mismo dice: “El cargo de Inspector de primera enseñanza profesional que se crea en cada una de las Administraciones, que consiguiera corresponde á los aspirantes que reúnan los requisitos para el nombramiento de unos y de otros” y la Real orden de trece de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho que se refiere á la propuesta en terna formulada por el Gobierno General á favor de individuos

en quienes concurren las circunstancias legales.—Vista la Real orden de nueve de Abril de mil ochocientos noventa y dos, que modifica el artículo ochenta y dos del Decreto de mil ochocientos ochenta en la siguiente forma: “Los Inspectores de primera enseñanza serán nombrados por el Gobierno de S. M.—Para optar á estos cargos se necesita poseer título de Maestro de primera enseñanza normal ó superior.—El Gobernador General anunciará las vacantes en la GACETA de Puerto-Rico fijando dos meses de término en la convocatoria para que los aspirantes presenten sus solicitudes acompañadas de la relación de sus méritos y servicios.—Terminado el plazo señalado en la convocatoria, remitirá al Ministerio de Ultramar todas las instancias documentadas de los aspirantes debidamente informadas, y se concederá la plaza de entre los que hayan concurrido al concurso al que designe y nombre el Ministerio de Ultramar.—El cargo de Inspector de primera enseñanza será amovible.—Fallamos: que debemos declarar y declaramos improcedente la excepción de incompetencia alegada por el Fiscal, y que debemos revocar y revocamos la Real orden de diez y seis de Abril de mil ochocientos noventa y dos, por ser nulo el nombramiento que la misma contiene; y en su lugar declaramos que el cargo de Inspector de primera enseñanza del Distrito del Sur de la Isla de Puerto-Rico, debe recaer en aspirante al concurso abierto para la provisión del mismo, que reúna las condiciones marcadas en el artículo ochenta y dos, del Decreto de primero de Septiembre de mil ochocientos ochenta.—Así por esta nuestra Sentencia que se remitirá y publicará en la Gaceta de Madrid y se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Félix García Gómez—Angel María Dacarrete.—Candido Martínez.—José Núñez de Prado.—José María Valverde.—Publicación: Leida y publicada fué la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Don Angel María Dacarrete, Consejero de Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, en audiencia pública celebrada por la Sala en el día de hoy de que certifico como Secretario.—Madrid veinte y tres de Diciembre de mil ochocientos noventa y tres.—Licenciado—Ricardo Díaz Merry.—Y en cumplimiento del artículo ochenta y tres de la Ley de trece de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho, expido el presente testimonio que se remitirá al Ministerio de Ultramar á los efectos de los artículos ochenta y tres y ochenta y cuatro de dicha ley.—Madrid á doce de Enero de mil ochocientos noventa y cuatro.—Antonio de Vejarano—rubricado.—

Es copia. Madrid 26 de Febrero de 1894.—El Subsecretario, *Sanchez Guerra*.

Para que la Junta provincial de Instrucción pública, pueda con verdad o acierto dar comienzo á los trabajos preliminares referentes á la jubilación de los maestros y maestras de esta Isla, acordada por Real Decreto de 1º de Febrero último, el Excmo. Sr. Gobernador General se ha servido disponer que en un término que no exceda de quince días remitan las Juntas locales á dicha Corporación las hojas de servicios del profesorado público, tanto de los que sirvan escuelas e propiedad como de los que se hallasen sustituidos, y de sus sustitutos, acompañando al objeto los respectivos expedientes personales, y todos los documentos originales, creditivos de sus nombramientos, ceses, títulos profesionales y administrativos, no omitiendo por ningún concepto noticias detalladas de las licencias que hubiesen disfrutado, así como de las penas gubernativas impuestas como resultado de los expedientes que á algunos se les haya seguido.

Lo que de orden de S. E. se publica en la GACETA para conocimiento general y fiel cumplimiento por parte de las Corporaciones aludidas.

Puerto-Rico, 24 de Marzo de 1894.—El Secretario del Gobierno General, *José García de la Concha*. [290]

Declarada vacante la plaza de Inspector de 1ª enseñanza del Distrito Sur de esta Isla, por Real orden de 12 de Febrero próximo pasado, el Excmo. Sr. Gobernador General, en cumplimiento á lo dispuesto por el Gobierno de S. M., ha decretado con esta fecha se proceda á la provisión en propiedad de la referida plaza con arreglo á lo prescrito en el artículo 82 del Decreto orgánico de 12 de Septiembre de 1880, y disposición 5ª de la Real orden de 5 de Febrero de 1881, señalando al objeto un plazo de dos meses para que los aspirantes puedan presentar sus solicitudes en esta Secretaría, acompañadas de sus respectivas hojas de servicio legalizadas en forma.

Lo que de orden de S. E. se publica en la GACETA para conocimiento general y á los efectos que se determinan.

Puerto-Rico, Marzo 26 de 1894.—El Secretario del Gobierno General, *José García de la Concha*. [291] 3-1